

**OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA  
PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE  
EXENCIÓN POR CATEGORÍAS**

29 Mayo 2016

La normativa que regula las ayudas de Estado y la que rige los ESIF, estrechamente ligados éstos a la consecución de las estrategias comunitarias para el año 2020, responden a razones fundamentadas en el mantenimiento de la competencia en pie de igualdad en el mercado interior y en el principio de cohesión. Ambos principios son pieza clave para la articulación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en consecuencia de especial importancia su correcto cumplimiento.

Cabe recordar que como consecuencia de estudios económicos que demostraron, en relación con algunos terceros países, el menor apoyo institucional a la innovación de las empresas europeas y la insuficiencia en Europa de inversión privada en I+D+i, el objetivo temático 1 para la aplicación de los ESIF en el período 2014- 2020, pone de manifiesto que se considera cuestión prioritaria el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación como vía para, a través del conocimiento y del proceso innovador, dotar a las empresas y a los productos y servicios europeos del valor añadido necesario para diferenciarlos y hacerlos excelentes de tal forma que se incremente drásticamente su competitividad en los mercados globales.

Para ello se estableció como condición ex ante para el acceso de los EE.MM. a estos fondos, la elaboración de unas estrategias regionales inteligentes de I+D+i para el desarrollo de cada región cuyo resultado definiría las actividades prioritarias en las que se concentrarían únicamente los programas de ayudas co-financiados con FEDER y encuadrados en citado objetivo temático 1.

El Reglamento 1303/2013 establece los objetivos generales que se persiguen con los fondos y hace especial hincapié en la necesidad de incrementar la competitividad de las empresas asegurando la viabilidad de los proyectos hasta, si se demuestra necesario, **la puesta en el mercado de sus resultados**. Asimismo este Reglamento abre la cofinanciación europea al capital privado y alienta la utilización de instrumentos financieros distintos de los utilizados hasta ahora.

Ahora bien, el Reglamento 1303/2013 en aquéllas medidas de apoyo en las que pueda apreciarse elementos de ayuda de Estado se somete a lo establecido en la normativa europea sobre esta materia.

Las inconsistencias existentes entre el precitado Reglamento 1303/2013 y las normas de ayudas de Estado, en especial cuando se trata de la I+D+i, ponen en riesgo la eficacia de los fondos europeos en el período 2013-2020 para la consecución de los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea.

De hecho, el Consejo se ha pronunciado recientemente en este sentido, invitando a la Comisión a alinear y asegurar una mayor coherencia entre las reglas relativas a ESIF y H2020 y, en lo posible, con la normativa de ayudas de Estado, de forma que se fomente la investigación, desarrollo e innovación, considerando además el contexto de competencia global<sup>1</sup>.

Las observaciones que se realizan a continuación, se hacen en el contexto definido anteriormente en relación con la propuesta de modificación del texto del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC).

Como la Comisión Europea señala en la presentación del borrador del texto, el RGEC juega un papel crucial cuando se trata de simplificar la carga administrativa de autoridades públicas y beneficiarios así como de acortar los plazos en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 108 del Tratado. Proporciona seguridad jurídica permitiendo poner en marcha rápidamente medidas de apoyo a las empresas sin cláusulas suspensivas. El apoyo a la I+D+i, especialmente si está cofinanciado con fondos europeos, necesita más que otras actividades de estas facilidades para ser eficaz.

Teniendo en cuenta que el periodo de programación 2013-2020 está próximo a alcanzar su punto medio, parece lógico que esta revisión del texto del RGE sea aprovechada para corregir las inconsistencias con la regulación de los ESIF que dificultan la ejecución de estos fondos y pueden restarles eficacia.

1. En primer lugar cabe destacar que la nueva redacción que se propone para el artículo 7.1 viene a solucionar una de las inconsistencias existentes entre el Reglamento 1303/2013 y la normativa de ayudas de Estado. Siendo así que en las categorías de I+D+i la forma de cálculo de determinados costes, en especial los indirectos, tienen gran relevancia para hacer más pesada o no la carga administrativa, tanto cuando se decide el apoyo del proyecto como cuando se realiza el control y la justificación de las ayudas. No obstante y para evitar que esta simplificación quede prácticamente vacía de contenido por lo

---

<sup>1</sup> Conclusiones del Consejo adoptadas el 27/05/2016 ("Research and Innovation friendly regulation").

En términos similares se pronuncia el borrador de Conclusiones del Consejo "Increasing the effectiveness of Cohesion Policy: Towards a R&I friendly, smart and simple policy", que recalca que, en relación a los programas ESIF, la armonización de los criterios de elegibilidad y las condiciones de financiación con otros programas como H2020, se ve obstaculizada por las reglas de ayudas de Estado, así como por diferentes procesos de auditoría y diferentes requisitos de información, control y evaluación.

que se refiere a la I+D+i o sólo afecte a la categoría de ayudas a la formación, sería recomendable que de la misma forma que en el artículo 31.3.d se indica: "los costes de personal de los beneficiarios de la formación y los costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) por las horas en las que los beneficiarios participen en la formación.", en el artículo 25.3.a donde pone: "los costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto", pusiera : **"los costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto. Estos costes podrán incluir en esta misma medida los costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) que les estén asociados siempre que estos costes generales no se hayan incluido siguiendo lo establecido en el apartado e) siguiente"**.

De la misma forma, en el artículo 28.3.a dónde pone: "los costes de personal", debería sustituirse por "los costes de personal y los costes indirectos **generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) que les estén asociados, siempre y cuando no se hayan financiado entre los incluidos en el apartado d) siguiente.**

De esta manera quedaría más claro el concepto de costes generales indirectos asociados a los gastos de personal por lo que se refiere al ámbito de la I+D+i y su elegibilidad.

2. El Plan de evaluación de los regímenes de ayuda con presupuesto superior a 150 millones de euros debería no exigirse a aquéllos que estuviesen co-financiados con fondos FEDER para el objetivo temático 1 (I+D+i) y ello en razón de que estarán dirigidos a una actividad prioritaria definida en una RIS3. El control de indicadores, los objetivos, en general las informaciones que contienen el plan de evaluación ya han sido definidos tanto en la RIS3 correspondiente como en el Plan Operativo en el que se encuadra. Se trata por tanto de una carga administrativa redundante que aporta inseguridad jurídica y lentitud a la medida de que se trate. Bastaría con añadir en el artículo 1.2 a) "Quedan exentos los regímenes de ayudas de la sección 7 dirigidos a una actividad prioritaria definida en una estrategia regional de I+D+i (RIS3)".
3. Para el caso de regímenes de ayuda a la I+D+i co-financiados con FEDER, debería estudiarse cómo y bajo qué umbrales se podrían admitir como transparentes determinados instrumentos financieros admitidos en el Reglamento 1303/2013. Para estos casos podría

establecerse cuantías y condiciones de forma similar a cómo lo hace el Reglamento *de minimis*.

4. El mecanismo de claw-back que establece el artículo 26.7, puede llegar a ser un serio impedimento para movilizar capital privado en la construcción o actualización de infraestructuras de I+D+i debido a la inseguridad jurídica que provoca este mecanismo. Asimismo la carga administrativa que se genera para las administraciones públicas es importante. En general y especialmente en el caso de regímenes cofinanciados con ESIF, este mecanismo debe estudiarse para llegar establecer de forma ajustada y predecible umbrales para su aplicación.